



JOSÉ GILDARDO RAMÍREZ GIRALDO

Magistrado

Proceso: Ejecutivo  
Demandante: VICUNHA ECUADOR S.A  
Demandado: JULIÁN RICARDO URIBE HIGUITA  
Radicado: 05001310301920210032101  
Decisión: CONFIRMA SENTENCIA  
Sentencia Nro. 010

**TRIBUNAL SUPERIOR**  
**SALA TERCERA DE DECISIÓN CIVIL**  
**Medellín, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés**

Se procede a decidir por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada frente a la sentencia del 24 de agosto de 2022, proferida por el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, dentro del proceso Ejecutivo instaurado por VICUNHA ECUADOR S.A en contra de JULIÁN RICARDO URIBE HIGUITA.

**I. ANTECEDENTES**

1. Pretende la parte demandante que se libre mandamiento de pago a su favor y en contra del demandado por las siguientes sumas: *\*Treinta mil ciento sesenta y tres dólares con diecinueve centavos (USD30.163,19) como capital, más los intereses moratorios causados desde el 6 de junio de 2018 hasta que se produzca el pago; más los intereses moratorios con fundamento en el artículo 886 del C. Cio que produzca la suma adeudada por concepto de intereses al momento de presentación de la demanda, la cual se adeuda con más de un año de anterioridad. Dichos intereses de mora deberán ser calculados a la máxima tasa legal vigente desde la presentación de la demanda y hasta el pago.*

2. Como sustrato de sus pedimentos, adujo los planteamientos que el Despacho así compendia:

**a)** *El señor JULIÁN RICARDO URIBE HIGUITA suscribió un pagaré el 21 de julio de 2016, a la orden de VICUNHA ECUADOR, obligándose al pago de la suma de CINCUENTA MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD50.000), con vencimiento el 5 de junio de 2018. A la fecha de presentación de esta demanda, adeuda la suma de USD30.163,19; por lo tanto, la ejecutante tiene derecho a exigir tanto lo adeudado por capital, como por intereses moratorios desde la fecha de vencimiento del título valor, a la tasa de una y media veces el interés bancario corriente, de conformidad con el artículo 884 del Código de Comercio.*

**b)** *El ejecutado se obligó, de conformidad con lo establecido en el numeral segundo del pagaré, al pago de intereses moratorios a la máxima tasa legal sobre los intereses pendientes de pago con un año o más de anterioridad, a partir de la fecha de presentación de la demanda judicial para el cobro. "Igualmente, y de conformidad con el artículo 886 del Código de Comercio colombiano, a partir de la fecha en que el Acreedor instaure demanda judicial para el cobro de obligaciones insolutas, si existieren intereses pendientes con un año o más de anterioridad, sobre éstos se liquidarán intereses moratorios a la máxima tasa moratoria, aplicable según el numeral 1 anterior."*

3. **TRÁMITE.** Inicialmente la demanda es presentada ante los JUECES CIVILES MUNICIPALES, correspondiendo al DIECISEÍS, quien declara la falta de competencia y la remite a los JUZGADOS DE CIRCUITO. La demanda es inadmitida en el JUZGADO DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO y al no haberse dado cumplimiento a los requisitos exigidos, se rechaza mediante auto del 20 de septiembre de 2021, ante lo cual se interponen los respectivos recursos. Mediante auto del 13 de octubre de 2021 no se repone y se concede apelación. En cumplimiento al auto del 4 de noviembre de 2021 de esta Sala que revoca el auto, se procedió en **auto de 30 de noviembre de 2021** a librar mandamiento de pago adecuando el cobro conforme lo dispone el artículo 430 CGP. Así, libra mandamiento de pago a favor de la sociedad VICUNHA ECUADOR S.A en contra de JULIÁN RICARDO URIBE HIGUITA por la suma de USD30.163,19, más los intereses de mora liquidados a la tasa máxima legal permitida por la superfinanciera a partir del 6 de junio de 2018 y hasta el pago total de la obligación. Se deniega lo atinente a la capitalización de intereses. Una vez notificado el demandado URIBE HIGUITA a través de

*apoderado judicial, interpone recurso de reposición contra dicho auto, aduciendo incumplimiento a los requisitos formales del título e igualmente da respuesta a la demanda proponiendo como excepciones de mérito: \*no cumplimiento de los requisitos del título para prestar merito ejecutivo: el documento no contiene una obligación clara, expresa y exigible, no aparece la firma de quien se determine así mismo como creador del título y si bien aparece una firma no se especifica en calidad de qué firma, no es posible determinar el lugar de cumplimiento de la obligación porque no se puede determinar quién es el creador y por ende el domicilio. \*Indeterminación del lugar del cumplimiento de la obligación y \*regulación y pérdida de intereses. Mediante auto del 3 de mayo de 2022 se consideró no dar trámite al recurso de reposición por extemporáneo y la contestación de la demanda fue en término, pero no se propone una verdadera excepción de mérito y lo relativo al cobro de intereses, no se alega un hecho novedoso o modificativo encaminado a desvirtuar lo pretendido y además el mandamiento de pago fue adecuado conforme lo dispone el artículo 430 CGP. A esta decisión se interponen recursos, que no prosperaron y se concede apelación. El 1º de julio de 2022 esta Sala REVOCA PARCIALMENTE el auto recurrido y dispone: "En consecuencia se le dará trámite al escrito de excepciones **solo para que se dé trámite a la tercera, relativa al cobro de intereses en exceso**".*

## **II. LA SENTENCIA APELADA**

4. Mediante sentencia del 24 de agosto de 2022, el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, *consideró reunidos los requisitos formales del proceso, citando las normas aplicables al caso advirtiendo que el título valor aportado cumple los requisitos de los artículos 621 y 709 del C. Cio y 422 CGP en tanto el capital relacionado se encuentra especificado y las exigencias para el pago. Sobre las excepciones, se pronuncia exclusivamente sobre la relativa al cobro de intereses en exceso. El demandado Julián Ricardo Uribe Higueta solicitó la regulación y pérdida de intereses puesto que la parte demandante pretendió el cobro de intereses no permitidos por la legislación colombiana al pretender cobrar intereses sobre intereses y en ese sentido debía darse aplicación a lo establecido en el artículo 884 del Código de Comercio. Del análisis de esta norma y del artículo 72 de la ley 45/90 advierte que cuando una persona cobra intereses que rebasan los parámetros legalmente impuestos, deviene la sanción de pérdida del interés, bien sea remuneratorio o moratorio, aumentada dicha cifra en una igual. De cara al caso en concreto sobre los intereses que se cuestionan y tal y como fue advertido*

*en auto del 03 de mayo de 2022, no se alega un hecho novedoso o modificativo, encaminado a desvirtuar lo pretendido, más aún cuando no se alude a la forma en la que supuestamente se configuró el cobro de intereses en exceso, toda vez que la excepción fue propuesta en términos abstractos y sin tener presente las directrices del Juzgado al momento de librar mandamiento de pago, reiterado en auto del 01 de junio de 2022 en cuanto a que la parte demandada no emprendió ninguna tarea argumentativa sobre su configuración, además que en la contestación no se aludió a cuáles fueron los intereses que sobrepasaron el límite permitido o si le fueron cobrados intereses sobre intereses, su monto, así como circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon tal hecho; dicho de otra forma, no se realizó narración fáctica alguna que soportara la excepción esbozada, sumado a que, se itera, en el mandamiento de pago se tomó dirección del cobro de intereses conforme a lo dispuesto en el artículo 884 e igualmente se resolvió lo relativo al cobro de intereses sobre intereses regulado en el artículo 886 ibídem y a una eventual capitalización, ajustándose la ejecución a los términos consagrados en el artículo 430 del C.G.P. Por su parte, se tiene que el ejecutante al traslado de la referida excepción, señaló que en el pagaré ni se pactó un interés mayor al legal, ni se le cobró y que la solicitud que pretendía el cobro de intereses sobre los intereses con fundamento en el artículo 886 del Código de Comercio fue denegada por el Despacho y, en consecuencia, no hace parte del proceso. Se desprende de la simple lectura de la norma antes transcrita, que la sanción opera en los casos en que el deudor haya cancelado intereses que sobrepasen el límite fijado por la Ley y que incluso, el solo hecho de pactarlos no da lugar a la sanción, pues se requiere de su cobro o pago, supuesto de hecho que no resultó probado en el plenario. Por lo anterior, no encontró probada la excepción de mérito propuesta y los argumentos esgrimidos no fueron suficientes para desestimar las pretensiones de la demanda. Por lo tanto, "Falla: **Primero.** Se declara no probada la excepción de mérito propuesta por la parte demandada. **Segundo.** Ordenar continuar adelante con la ejecución, en la forma dispuesta en el mandamiento de pago... **Tercero.** Practíquese la liquidación del crédito.... **Cuarto.** Condenar en costas a la parte ejecutada....".*

### III. LA IMPUGNACIÓN

5. Inconforme con la decisión, la sentencia fue recurrida por la parte demandada presentando los reparos y la sustentación en similares términos, en la oportunidad concedida en esta instancia.

**PRIMERO: Indeterminación del lugar de cumplimiento de la obligación.**

En el documento aducido como título valor, se expresa que el pago se realice en Medellín sin especificar otra característica de índole geográfico que permita la determinación inequívoca de a qué ciudad se refiere. Incluso en la carta de instrucciones se menciona el punto en similar situación. El documento se firmó con una sociedad cuyo domicilio comercial y de operaciones se encuentra en el país de Ecuador y el presunto deudor se encuentra en Colombia y de éste en el escrito de demanda se señala como domicilio la ciudad de Envigado; igualmente en el aparte de notificaciones se señala una dirección en la ciudad de Envigado. Por lo cual se puede determinar que las relaciones y negocios entre las partes cuentan con una índole internacional puesto que ambos desarrollan su actividad comercial en diferentes países y del hecho que las obligaciones presuntamente contraídas se pactaran en dólares. De una rápida búsqueda en internet se puede establecer que existen por lo menos 4 ciudades en el globo terráqueo que responden al nombre de Medellín: una en el departamento de Antioquia, otra en la región de Extremadura en España, en la región de Veracruz en México y en la región de central Visayas en Filipinas. Adicional, en Colombia en el departamento del Meta se encuentra el corregimiento de Medellín del Ariari en el municipio del Castillo. La información de las ciudades que responden al nombre de Medellín se pueden comprobar en este link: <https://www.geodatos.net/ciudades-homonimas/medellin> y su autenticidad se puede corroborar con una simple búsqueda en Google. Es pertinente citar el artículo 619 del Código de Comercio para indicar que el sentido literal del título que se pretende preste mérito ejecutivo, no incorpora una obligación expresa y clara a cargo del demandado puesto que de su lectura y contenido no se puede establecer expresamente el lugar de cumplimiento de la obligación, no se especifica geográficamente la ciudad donde se debe cumplir, la obligación se pactó en dólares y al existir varias ciudades que llevan el nombre donde se dispuso se pagaría la obligación no les es dable al juzgador asignar un lugar de cumplimiento de la obligación cuando de la literalidad del título no se puede establecer de manera inequívoca y la misma no puede ser llenada ni por la ley o asignada de manera deliberada ni por el demandante ni por el despacho de conocimiento, puesto que desconocería la regla de la literalidad de los títulos valores norma imperativa y que no puede ser desconocida ni por las partes ni por el juzgador. No siendo posible determinar el lugar exacto de cumplimiento de la obligación, el documento no contiene una obligación clara, expresa y exigible a cargo del deudor y la misma no puede ser cobrada por la vía del proceso ejecutivo. Establece el Código de Comercio en su artículo 784 lo siguiente: EXCEPCIONES DE LA ACCIÓN CAMBIARIA. Contra la acción cambiaria sólo podrán oponerse las siguientes excepciones: "4) Las

*fundadas en la omisión de los requisitos que el título deba contener y que la ley no supla expresamente”; Ahora bien, aun cuando el CGP establece en su artículo 430, que los requisitos formales del título solo podrán alegarse vía recurso de reposición contra el auto que libró mandamiento de pago, se debe indicar que este artículo no derogó el contenido del artículo 784. Al existir una aparente contradicción entre disposiciones jurídicas, se debe acudir a las normas de interpretación que establece el ordenamiento jurídico colombiano. Es así como se debe remitir a lo regulado en la ley 57 de 1887 en su artículo 5°. Cuando haya incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, preferirá aquélla. Si en los Códigos que se adoptan se hallaren algunas disposiciones incompatibles entre sí, se observarán en su aplicación las reglas siguientes: 1ª La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general.*

**SEGUNDO: Respecto al cobro de los intereses** que pretendió la parte demandante, se debe atener a lo dispuesto en el artículo 884 que estipula lo siguiente: “LIMITE DE INTERESES Y SANCIÓN POR EXCESO. Cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste será el bancario corriente; si las partes no han estipulado el interés moratorio, será equivalente a una y media veces del bancario corriente y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990”. **La sanción descrita en el artículo precedente opera de pleno derecho, nótese que el artículo en cuestión que establece la sanción no establece requisitos probatorios o formalidades que se deban cumplir para la aplicación de la sanción;** es decir, la mera comprobación por parte del operador judicial **que se pretendía incurrir** en esta práctica sería suficiente para la aplicación de lo previsto en este artículo. En el caso concreto, desde el inicio el operador judicial tuvo conocimiento **de la intención** del cobro de los intereses en exceso, puesto que así se estableció en el escrito de demanda, siendo el momento en que se libró el mandamiento de pago donde el operador judicial advirtió al demandante sobre esta situación y fijó el monto de intereses que se derivaría en el presente cobro ejecutivo como el legalmente establecido, así fue como al percatarse de esta situación debió el juzgado de conocimiento aplicar la consecuencia jurídica de tal práctica, tal como lo establece el código de comercio. Argumenta el juzgado de conocimiento que se debió haber probado tal situación, pero tal como se indicó, **la consecuencia jurídica por pretender cobrar intereses en exceso se aplica de pleno derecho**, puesto que la norma no establece requisitos probatorios o adicionales más allá de verificar su ocurrencia. Por lo cual se debió haber aplicado la sanción como se solicitó, puesto que donde la ley no establece requisitos no les dable al



*intérprete establecerlos de manera unilateral por sí mismo. Esto en concordancia con el principio de la interpretación gramatical establecido en el artículo 27 del código civil que expresa: Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Termina el escrito solicitando: "conceder el recurso de apelación ante el superior funcional y enviar el expediente y demás documentos necesarios para su trámite".*

6. En sede de segunda instancia, en forma oportuna se pronunció el apoderado de la parte demandante con escrito de alegatos: **1. FRENTE A LA CONSIDERACIÓN DENOMINADA "INDETERMINACIÓN DEL LUGAR DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN"**, no puede ser objeto de apelación pues la misma ya sido desestimada por el juzgado de primera instancia y confirmada por este Tribunal, para lo cual transcribió la decisión. Adicional y sólo en gracia de discusión, la parte demandada dio autorización al tenedor del pagaré para que determinara el lugar del cumplimiento de la obligación. Al establecer dentro del pagaré la ciudad de Medellín y presentar la demanda ejecutiva en esta misma ciudad sin que el demandado haya excepcionada la falta de competencia de los jueces para conocer del proceso, es más que evidente que ha sido el lugar escogido para el cumplimiento de la obligación por parte del acreedor, por lo cual los argumentos de la parte demandante carecen de fundamento tanto lógico como legal. **2. FRENTE A LA SOLICITUD DE PÉRDIDA DE INTERESES** prevista en el artículo 884 del Código de Comercio, únicamente es aplicable a los eventos en que se pacten o se cobren intereses a una tasa mayor a la legalmente permitida. A esa conclusión se llega fácilmente cuando el referido artículo incluye conceptos como "interés bancario corriente" o "una y media veces del bancario corriente", pues son estos la base que da lugar a la sanción por pactos o pagos de intereses que "sobrepasen cualquiera de estos montos". En el presente caso no ha habido un pacto ni un cobro de intereses por encima de los máximos permitidos, de ahí que no se cumple el supuesto de hecho para que haya lugar a la sanción pretendida. El demandante desconoce en su solicitud la existencia del artículo 886, que prevé la posibilidad del cobro de intereses sobre intereses, bajo unos criterios precisos que, claramente, no es uno de los eventos sancionables a los que hace referencia el artículo 884 del Código de Comercio. Las sanciones en el derecho colombiano son restrictivas y no cabe su aplicación a partir de supuestos de hecho no previstos en la norma. Dentro del escrito de demanda, se solicitó dar aplicación al artículo 886 toda vez que a criterio de la parte demandante, se cumplen los requisitos para ello; sin embargo, la decisión del juzgado de primera instancia en el auto que libró mandamiento de pago fue contraria, pues denegó dicha petición y, aun cuando

*dicha decisión pudo haber sido recurrida, no se hizo buscando la mayor agilidad del cobro, de forma que esa pretensión quedó por fuera del proceso. Por ello, la consideración planteada en el recurso de apelación, además de ser improcedente, pretende atacar una pretensión que no existe en el proceso, pues se reitera, las únicas pretensiones que se discuten en este proceso son las planteadas en los numerales primero y segundo de la demanda, tal y como fueron reconocidas en el auto que libró mandamiento. En el pagaré no se pactó un interés mayor al legal, ni al deudor se le cobró y una solicitud que pretendía el cobro de intereses sobre los intereses con fundamento en el artículo 886 del Código de Comercio (supuesto muy diferente al de una tasa superior a la legal) fue denegada por el Despacho y, en consecuencia, no hace parte de este proceso. Terminan el escrito solicitando desestimar la apelación y la condena en costas.*

#### **IV. CONSIDERACIONES**

7. Al no advertirse ningún vicio que pueda invalidar lo actuado y al estar cabalmente satisfechos los presupuestos procesales, se procede a definir el mérito del asunto. Conforme a la competencia restringida del superior en sede de apelación, prevista en el artículo 328 del CGP, habida cuenta que el recurso de apelación fue formulado únicamente por el demandado, está limitada la competencia al estudio de los temas que fueron propuestos por el recurrente al sustentar el recurso de apelación.

**8. PROBLEMA JURÍDICO.** *Se concreta en determinar si asistió razón al A quo al declarar impróspera la excepción formulada, ordenando seguir adelante con la ejecución en la forma indicada en el mandamiento de pago, confirmando así la decisión o por el contrario, faltó análisis al contenido de la excepción para determinar si es cierto que el título allegado como base de recaudo no es claro, expreso y exigible, ante la indeterminación del lugar donde se debía cumplir la obligación y si era procedente la sanción por el cobro de intereses de usura, porque según se afirma, la consecuencia jurídica por pretender cobrarlos, se aplica de pleno derecho porque la norma no establece requisitos probatorios y revocar así la decisión.*



9. De acuerdo con lo previsto en el artículo 422 del C.G.P, por vía ejecutiva se pueden demandar las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y que constituyan plena prueba contra él. Ahora bien, según el contenido de los artículos 164 y 167 ibídem, las decisiones judiciales debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso y es carga de las partes probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico perseguido. Cuando se trata de procesos de ejecución, se parte de la base de la certeza de la obligación que se pretende hacer efectiva; es así como la parte demandante, tenedora del documento en que conste la misma, queda exonerada de la carga probatoria que le imponen las normas en mención, le basta allegar el título para que sus pretensiones se vean establecidas. En cambio, el accionado debe proponer y probar los hechos fundamento de las excepciones tendientes a enervar la acción.

10. En el caso concreto, fue allegado al expediente, el título valor base de recaudo, consistente en un pagaré que da cuenta que el señor **JULIÁN RICARDO URIBE HIGUITA** se obliga a cancelar a la sociedad **VICUNHA ECUADOR S.A**, una suma de dinero, debidamente determinada equivalente a **USD50.000** el día **5 de junio de 2018** y en cuanto a los intereses se estipuló: "tasa de interés corriente: 1% mensual. "1. *A partir de la fecha de vencimiento... se causarán intereses por mora a una tasa equivalente a la tasa máxima permitida por ley, intereses que pagará la suscriptora al acreedor por todo el tiempo que dure la mora hasta que ocurra el pago de la totalidad de las sumas indicadas...*". 2. *Igualmente, y de conformidad con el artículo 886 del código de comercio... a partir de la fecha en que el acreedor instaure la demanda judicial para el cobro de obligaciones insolutas, si existieren intereses pendientes con un año o más de anterioridad, sobre éstos se liquidarán intereses moratorios a la máxima tasa moratoria, aplicable según el numeral 1 anterior*". (resaltos fuera del texto).

Se lee claramente que el título fue creado el **21 de julio de 2016** y con fecha de vencimiento el **día 5 de junio de 2018**. Además fue suscrito por el señor URIBE HIGUITA y es viable afirmar que en esa medida se reconoce deudor de la sociedad aquí demandante, comprometiéndose a pagar las sumas allí especificadas. Así las cosas, se está en presencia de un pagaré que reúne todos y cada uno de los requisitos formales previstos en la legislación mercantil para que la acción cambiaria tenga eficacia y debe tenerse en cuenta que frente a ésta, ejercida en pos de la mentada literalidad, solo proceden las excepciones que consagra la norma 784 de la legislación mercantil, incluyendo aquella que atañe al pago, ya total, ora parcial del importe al que alude el documento, pero ella, para su prosperidad, demanda su fehaciente acreditación para poder derrumbar la eficacia crediticia que obtienen los títulos valores con la firma estampada en ellos y la entrega con la intención de negociabilidad (art. 625 del C. de Co), más aun cuando se han satisfecho los requisitos de forma previstos en los artículos 621 y 709 de la ley sustantiva mercantil.

11. Respecto a las razones esgrimidas en la impugnación, lo primero que habría que dejar establecido, tiene que ver con los motivos expuestos por el A quo al desatar la Litis y que por ende, es de allí donde tienen cabida los motivos de inconformidad que se plantean y por eso se advierte que la parte demandada al ser notificada de las pretensiones en su contra, interpuso recurso de reposición frente al auto que libró mandamiento de pago, pero lo hizo en forma extemporánea y así se dejó sentado en la respectiva providencia ordenando no dar trámite y sin ninguna manifestación por la parte demandada y en la contestación que dio a la demanda, si bien fue en término, no se corrió traslado considerando que no se estaban proponiendo verdaderas excepciones y respecto a los intereses que se cuestionan, no se alegó un hecho novedoso, además de que al librar la orden de pago, se estipuló que

procedían conforme al artículo 884 C. Cio. Dicho auto fue recurrido por no haberse dado trámite a la contestación, concretamente por las excepciones propuestas y en providencia emitida por esta misma Sala, vía recurso de apelación, se emitió el pronunciamiento respecto a las excepciones y se analizó claramente el tema relacionado con la indeterminación del lugar del cumplimiento de la obligación, misma que hace parte de la impugnación aquí planteada y se decidió REVOCAR PARCIALMENTE el auto recurrido **y ordenó dar trámite solo a la tercera excepción**, relacionada con el cobro de intereses en exceso, quedando tácitamente confirmado el resto con las indicaciones expuestas. Y en cumplimiento a esta decisión que alcanzó firmeza, fue que se continuó el trámite siendo también la única excepción que se analizó en la sentencia y que por ende, podía ser motivo de impugnación.

Así entonces, dada la competencia de esta Sala para resolver, el estudio que en esta oportunidad nos convoca frente a la sentencia emitida por el A quo, solo estará enfocada a la única excepción tramitada y que se enunció como la solicitud de la **"regulación y pérdida de intereses"**.

12. En las pretensiones de la demanda, junto con el saldo del capital adeudado, se solicitó el cobro de los intereses causados desde la mora y además, el pago de intereses moratorios sobre los intereses pendientes de pago con un año o más de anterioridad. (artículo 886 C. Cio). Al momento de librar el mandamiento de pago, el A quo con fundamento en el artículo 430 CGP adecuó la solicitud tomando como parámetro las directrices de la H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA que citó y concluyó indicando que los intereses que pueden ocasionar nuevos intereses son los remuneratorios o de plazo y de ninguna manera los intereses moratorios pueden generar nuevos intereses. Y por tanto, libró mandamiento de pago por el capital reclamado, más los intereses

de mora liquidados a la tasa máxima legal permitida desde el 6 de junio de 2018 y hasta el pago total y negó lo atinente a la capitalización de intereses.

13. Notificado el demandado da respuesta a la demanda, admite la suscripción del pagaré y propone como excepción **la regulación y pérdida de intereses** y aunque manifiesta que la parte demandante pretendió el cobro de intereses no permitidos por la legislación al pretender cobrar intereses sobre intereses, cita el artículo 884 **y solo se resalta y sin explicación alguna**, la parte de la norma que indica que: *"Cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste será el bancario corriente; si las partes no han estipulado el interés moratorio, será equivalente a una y media veces del bancario corriente **y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990.**"* dejando de lado que según lo tiene establecido el artículo 442 CGP, cuando se formulan excepciones debe tenerse en cuenta las siguientes reglas: *"1. Dentro de los diez... días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo **el demandado podrá proponer excepciones de mérito. Deberá expresar los hechos en que se funden las excepciones propuestas y acompañar las pruebas relacionadas con ellas.**"*

Esto para indicar que, desde el momento en que debió librarse el mandamiento de pago se explicaron los motivos por los cuales no era viable el cobro de los intereses sobre intereses pretendidos y sobre ellos no hubo ninguna objeción por parte del demandado, tanto que en el escrito de impugnación a la sentencia, admite que el A quo *"fijó el monto de intereses que se derivarían en el cobro ejecutivo como el legalmente establecido"*, solo que considera que desde ese momento debió aplicar la consecuencia que establece en esos casos el código de comercio y advierte además, que la sanción en ese caso opera de pleno derecho porque no se requiere requisitos adicionales ni probatorios y sobre ese argumento sustenta su

inconformidad y será además, el tema que en esta oportunidad se desarrollará.

14. Se tiene entonces que ante la orfandad para sustentar la excepción y solo partiendo del contenido de la norma que cita, artículo 884 ya transcrito, que regula lo relacionado al **límite de los intereses y la sanción por exceso** es pertinente hacer acotación al tema de la usura, que tiene sustento en el **artículo 305** del Código Penal -Ley 599 de 2000- y que tiene establecido: " <Penas aumentadas por el artículo [14](#) de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> **El que reciba o cobre, directa o indirectamente, a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del interés bancario corriente que para el período correspondiente estén cobrando los bancos,** según certificación de la Superintendencia Bancaria, cualquiera sea la forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o disimularla, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes. ... <Inciso adicionado por el artículo [34](#) de la Ley 1142 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando la utilidad o ventaja triplique el interés bancario corriente que para el período correspondiente estén cobrando los bancos, según certificación de la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces, la pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes" (resaltos fuera del texto).

Con fundamento en lo anterior puede deducirse que en un préstamo como en el caso que nos ocupa, donde se dio una entrega de una cantidad de dinero con el compromiso de devolverlo en un plazo que fue determinado, tal y como se estipuló en el título que es objeto de recaudo, habría usura cuando se recibe o cobra un interés que sobrepasa el una y media veces al bancario corriente, en tanto estaría sobrepasando los límites legales, máxime si se tiene en cuenta que así lo tiene estipulado el artículo tantas veces citado y sin perjuicio de las sanciones que prevé el artículo 72 de la ley 45 de 1990, consistente en la devolución de las sumas que se

hayan cancelado por concepto de los respectivos intereses, más una suma igual al exceso, a título de sanción.

15. No admite ninguna duda que la pena a que alude la norma, **sólo opera ante el pago que haga el deudor por encima de los topes legales**; es decir, si se pactan los réditos por encima de la usura y el deudor los desconoce o si se cobran por encima de lo acordado o de lo permitido, pero éste no los paga, la consecuencia, más que la pérdida y la restitución de los intereses, es la reducción de estos al tope que se autoriza. En cambio, si el prestatario acude a la solución de lo cobrado en exceso, ahí si se abre paso la sanción y, por ende, el acreedor pierde los intereses y además se ve compelido a devolverlos, aumentados como lo expresa el artículo 72 de la ley 45 de 1990.

El entendimiento del artículo 884 está orientado al pago, pues nótese que allí se ordena que ***"Cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste será el bancario corriente..."*** y de la misma manera el artículo 72 de la ley 45/90 autoriza al deudor a solicitar la devolución de lo cancelado: ***"Sanción por el cobro de intereses en exceso. Cuando se cobren intereses que sobrepasen los límites fijados en la ley o por la autoridad monetaria, el acreedor perderá todos los intereses cobrados en exceso, remuneratorios, moratorios o ambos, según se trate, aumentados en un monto igual. En tales casos, el deudor podrá solicitar la inmediata devolución de las sumas que haya cancelado por concepto de los respectivos intereses, más una suma igual al exceso, a título de sanción."*** Y de la misma manera la Corte Suprema<sup>1</sup> ha indicado que ***"... pactada la tasa de interés del mutuo o no pactada, lo cierto es que si finalmente se paga excediendo los topes legales establecidos al efecto, hay lugar a la sanción legal dispuesta cuando se da tal infracción..."***. Y por ello no es viable admitir como lo hace el impugnante, que la sanción opera de pleno

---

<sup>1</sup> Casación Civil de 27 de noviembre de 2002, exp.: 7400. M. P. Dr. Silvio Fernando Trejos Bueno. -



derecho, por el simple hecho de haber sido pactado o porque fue impetrado en la demanda o como también lo afirma, porque pretendió cobrarlo, cuando ni siquiera su alegación tuvo un sustento fáctico donde explicara la forma y los montos que le fueron cobrados por los intereses ni existe constancia de cuánto fue lo cancelado por éste.

16. En el escrito de impugnación, insiste el demandado en que para aplicar el monto de la sanción que contempla la norma, ***"será de acuerdo al monto pretendido por la parte demandante en el escrito de demanda, antes de la corrección realizada por el juzgado de oficio"***, pretensión que es completamente indeterminada, improcedente y extemporánea, no solo si se tiene en cuenta que en esos términos nunca fue formulada y no puede en esta oportunidad sorprender a la contraparte, sino porque además, si se miran las pretensiones de la demanda, en el cobro de intereses causados por el retardo en el pago del capital, tampoco se indicó suma concreta, porque solo se aludió a que los intereses serían los adeudados con más de un año de anterioridad y porque finalmente, es el demandado quien debía demostrar, cuáles fueron las sumas efectivamente canceladas de manera que fuese viable encontrar el monto de los intereses usurarios a los que se hizo alusión. Además y no de poca importancia son las estipulaciones que se hicieron en el pagaré que se allega como base de recaudo, donde claramente está estipulado que respecto a los intereses de mora y así mismo se planteó en la demanda, serían liquidados a la tasa máxima legal permitida por la ley, aclarando incluso que la intervención que hizo el A quo tuvo sustento sobre un tema diferente y que fue sustentada con fundamento en el artículo 886 del Código de Comercio, solo que el enfoque que se dio por la parte demandada tuvo origen en un cobro excesivo de intereses porque afirma sobrepasó los límites y con mayor razón, es a él a quien correspondía demostrar cifras

concretas, es a él a quien le corresponde brindar la información y la prueba fehaciente de su dicho.

17. Llama incluso la atención de la Sala, que en la proposición de la excepción ni siquiera se hace alusión a un monto que hubiese cancelado el demandado, máximo si se tiene en cuenta que al parecer hubo pagos, si se tiene en cuenta que el capital por el cual se libró mandamiento de pago es inferior al que se obligó a pagar en el pagaré. Con todo, es necesario advertir que el documento que soporta la acción ejecutiva, se refiere al cobro de una suma concreta, con el pago de intereses de mora a la tasa máxima legal permitida, allí no se estableció un cobro por encima de los límites permitidos y el cobro de intereses sobre intereses fue limitado desde el auto que libró mandamiento de pago porque las normas procesales que rigen en el presente caso, obligaban al juez a librar el mandamiento de pago por lo pedido o por lo que se considere legal y a ello se procedió y los intereses de mora estarán ajustados a las tasas certificadas por la superfinanciera y sin ninguna objeción por las partes; por ello, la excepción planteada estaría sujeta a la demostración del pago para determinar si efectivamente se incurrió en usura. Y como se dijo en acápites anteriores, en los procesos ejecutivos se parte de un derecho cierto, claro y exigible que le asiste al demandante por el hecho de tener en su poder un título proveniente del deudor que acredita la obligación, contrario de lo que sucede en los procesos declarativos o de conocimiento, la carga de la prueba se invierte para quedar en manos de quien excepciona. En este sentido, debió el demandado probar dicho pago en exceso. No basta entonces, la sola afirmación de que así sucedió. Por consiguiente, no existe prueba que lleve a desvirtuar las pretensiones de la parte demandante, ni mucho menos que permitan colegir, la existencia del aludido pago de intereses en exceso. Aunado a lo anterior, no puede perderse de vista la literalidad del título valor, ya que mide la extensión y profundidad de los derechos y de las

obligaciones. El título vale por lo que dice textualmente y conforme las normas cambiarias. Sin embargo, teniendo en cuenta que dicho principio no es incontrovertible, pudo la parte presentar pruebas que demostraran sus dichos en tanto **no es suficiente con que se pacte una tasa de interés superior, máxime en este caso que no ocurrió de acuerdo a lo advertido, sino además que la misma se cobre, se aporte prueba de su pago y de que excede el límite.**

18. Así entonces, si el acreedor cobra intereses no permitidos y **el deudor los paga**, habrá lugar a la imposición de las sanciones respectivas, cual se acaba de explicar y como en el caso concreto, ello no se demostró, existe imposibilidad de declarar probada la excepción propuesta por la parte demandada, razón más que suficiente para ordenar seguir adelante la ejecución a favor de la sociedad VICUNHA ECUADOR SA en contra del señor JULIÁN RICARDO URIBE HIGUITA tal como lo indicó el A quo en el mandamiento de pago, confirmando así la decisión. Dado el resultado de la impugnación, con condena en costas en esta instancia a la parte demandada.

## **V. DECISIÓN**

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN EN SALA TERCERA CIVIL DE DECISIÓN**, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

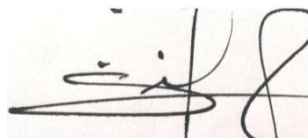
## **VI. FALLA:**

**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia del 24 de agosto de 2022, proferida por el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Oralidad de

Medellín, dentro del proceso Ejecutivo instaurado por VICUNHA ECUADOR S.A en contra de JULIÁN RICARDO URIBE HIGUITA.

**SEGUNDO.** Condenar en costas en esta instancia a la parte demandada en favor de la demandante.

### NOTIFÍQUESE



(Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022)

**JOSE GILDARDO RAMIREZ GIRALDO**

**Magistrado**



**MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO**

**Magistrado**

Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022



**MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO**  
**Magistrada**

Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Civil Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022